

CONSTANCIA SECRETARIAL: Quibdó, 16 de octubre de 2020. Llevo el proceso al Despacho de la señora Juez informándole que mediante mensaje de datos de fecha 31 de Agosto de la presente anualidad, el apoderado de la parte ejecutante dio respuesta al requerimiento efectuado mediante auto de sustanciación No. 449 del 28 de agosto de la presente anualidad. SIRVASE PROVEER.

YULY CECILIA LOZANO MARTINEZ
Secretaria

RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

Quibdó, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020).

AUTO INTERLOCUTORIO No. 635

RADICADO:	27001333300420170012600
EJECUTANTE:	EDILMA CONCEPCIÓN GUTIERREZZ
	ARBOLEDA
EJECUTADO:	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE CONDOTO
MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
ASUNTO:	DECIDE MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO Y REQUIERE

Vista la constancia secretarial que antecede, el Despacho analizará la procedencia o no de las medidas cautelares de embargo deprecadas en este asunto por la parte ejecutante.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

El principio de inembargabilidad busca proteger los dineros del Estado para asegurar de esa forma que se apliquen a los fines de beneficio general que les corresponden, haciendo realidad el postulado de prevalencia del interés general. Es una garantía que permite proteger los recursos financieros para el cumplimiento de las finalidades propias de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Este principio se materializa en el cumplimiento de la acción pública por parte de sus diferentes órganos y conlleva la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de las diferentes tareas que asume el Estado frente a la colectividad.

Entre dichas tareas y funciones se encuentra la prestación de servicios públicos como el de seguridad social del artículo 48 de la Constitución política que prohíbe destinar los recursos de las instituciones de la seguridad social a fines diferentes a ella.

En el artículo 63, a su vez se prohíbe el embargo de los bienes y rentas de las entidades públicas, así como de los bienes de uso público de propiedad de la Nación y además aquellos que determine la ley. Entre estos últimos se encuentran los bienes, las rentas y los recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema de participación, regalías y los recursos de la seguridad social (artículo 594. 1 Código General del Proceso).

**RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DE COLOMBIA**



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

Las medidas cautelares tiene amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (artículo 13, 228 y 229 de la Constitución Política).¹ Tienen como objeto evitar que los bienes se sustraigan del patrimonio del deudor y asegurar por lo tanto la ejecución de la sentencia estimatoria. En igual sentido, el Consejo de Estado ha afirmado que las medidas cautelares: *“Buscan prevenir y precaver las contingencias que pudieren sobrevenir sobre los bienes o las personas mientras se inicia o se adelanta un proceso. En opinión de CARNELUTTI, estas medidas buscan evitar aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes puedan derivar de la duración del proceso”*².

Ahora bien, en cuanto al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, se tiene que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos han sostenido que la medida cautelar de embargo resulta procedente siempre y cuando la acreencia estuviese contenida en una sentencia judicial o título valor o acto administrativo que contenga obligaciones claras, expresas y exigibles, que no hayan sido acatadas en los términos y procedimientos fijados en los estatutos procesales aplicables.

En efecto, en sentencia C-546 de 1992 en la que se revisó el artículo 16 de la Ley 38 de 1989 respecto al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, la Corte Constitucional determinó que si bien dicha norma resultaba exequible, lo cierto es que al presentarse colisión entre la protección de los recursos económicos del Estado y amparo del derecho fundamental al pago de salarios de los trabajadores vinculados con aquel, siempre debía primar el derecho fundamental al pago de la citada remuneración.

Consideró posteriormente, el máximo Tribunal Constitucional en la sentencia C-354 de 1997 que el principio de inembargabilidad general no es absoluto, pues debe ceder ***“cuando se trate de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dicha sentencia”***; así como ante las obligaciones contenidas en cualquiera de los modos o formas de actuación administrativas que regula la Ley.

Concluyó que los créditos a cargo del Estado, bien sea que conste en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento previsto en la norma y solo transcurrido el término para que ellos sean exigibles es posible adelantar la ejecución, con embargo de recursos del presupuesto, en primera medida, de los destinados al pago de sentencias o conciliaciones cuando se trate de esta clase de títulos, y en segunda medida, sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

También en las sentencias C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010 la Corte Constitucional reiteró su postura en cuanto al principio de inembargabilidad y sus excepciones, tesis adoptada por las diferentes secciones del Consejo de Estado en sede de tutela al revisar las decisiones de los Tribunales Administrativos del país respecto de la no aplicación de las medidas cautelares de embargo en virtud de lo consagrado en el artículo 594 del C.G.P³.

¹ Tal y como lo ha reconocido la Corte Constitucional en sentencia C-490 del 4 de mayo del 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

² Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto de 26 de marzo de 2009. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 34882.

³ Sentencia del 24 de octubre de 2019. Magistrada Ponente: Nubia Margoth Peña Garzon. Radicado No. 11001-03-15-000-2019-03488-01. Actor Cooperativa de médicos especialistas del Chocó y Afines – Coomesa.

**RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DE COLOMBIA**



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

Conforme lo expuesto y atendiendo los reiterados pronunciamientos del Tribunal Administrativo del Chocó y del Consejo de Estado sobre la procedencia del embargo frente a los recursos públicos, el Despacho accederá a la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante, toda vez que la acreencia aquí ejecutada corresponde a créditos contenidos en una sentencia judicial de donde se derivan obligaciones claras, expresas y exigibles; criterio que se mantendrá hasta tanto el máximo Tribunal de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, profiera Sentencia de unificación respecto del presente asunto, como lo anunció en providencia del 25 de abril del año 2019.

En ese orden de ideas, se ordenará que por secretaría se oficie a los Bancos AV Villas, BBVA, Popular, Bancolombia, Banco de Bogotá y Agrario de la ciudad de Quibdó para que retengan los dineros que tenga la E.S.E. Hospital San José de Condoto en dichas instituciones financieras.

Dichos recursos deberán retenerse hasta el 15% y los deberán poner a disposición de este Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales No. 270012045104 del Banco Agrario de esta ciudad.

Se advierte que esta orden recae única y exclusivamente sobre los dineros que no tengan el carácter de inembargables en los términos del artículo 594 del C.G.P.

La anterior medida cautelar de embargo será limitada hasta la suma de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$124.404.742)**.

De otro lado, observa el Despacho que a folios 21 y 22 del cuaderno de medidas, obra memorial suscrito por el señor JAVIER LUNA GARCES quien comparece al proceso manifestando actuar en calidad de Gerente de la ESE Hospital San José de Condoto, a través del cual solicita se corra traslado de la respuesta dada al auto de sustanciación proferido en este asunto, en donde se le informa que la parte ejecutante deprecia el embargo y retención de los dineros que se encuentran depositados en la cuenta de gastos de la administración, ahorro o corriente, local o nacional que la entidad que dirige posee en las entidades financieras Bancolombia, Banco Popular, BBVA, AV Villas, agrario de Colombia y Bogotá al Ministerio Público como garante del ordenamiento jurídico, para que emita concepto frente a ello y además abstenerse esta instancia judicial de decretar la medida de embargo solicitada.

Previo a darle trámite a la solicitud elevada por el señor LUNA GARCES, se dispondrá que, por secretaria, se le requiera para que en el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente al recibo de la comunicación, coadyuve su petición, por conducto de un profesional del derecho, dado que el mismo no acredita ser abogado titulado e inscrito para presentar este tipo de solicitudes ante este estrado judicial y además acredite la calidad de Gerente de la entidad ejecutada con la que dice actuar en este asunto.

Por lo expuesto, se

DISPONE:

PRIMERO: DECRETESE el embargo y retención de los dineros que tenga o llegare a tener la E.S.E. Hospital San José de Condoto en los Bancos AV Villas, BBVA, Popular, Bancolombia, Banco de Bogotá y Agrario de la ciudad de Quibdó, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

**RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DE COLOMBIA**



JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE QUIBDÓ

Dichos recursos se retendrán hasta la suma de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$124.404.742)** y en un 15% del valor de las cuentas afectadas.

Se advierte que esta orden recae única y exclusivamente sobre los dineros que no tengan el carácter de inembargables en los términos del artículo 594 del C.G.P.

La retención ordenada deberá consignarse en la cuenta de DEPÓSITOS JUDICIALES que este Juzgado tiene en el Banco Agrario de esta ciudad bajo el código 270012045104 y dar aviso a este despacho dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de esta comunicación.

Líbrese los oficios correspondientes para tal fin.

SEGUNDO: Por secretaria, requiérase al señor JAVIER LUNA GARCES para que en el término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente al recibo de la comunicación, coadyuve su petición de fecha 2 de septiembre de 2020 por conducto de un profesional del derecho y además acredite la calidad de gerente de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE CONDOTO con la que dice actuar en este asunto.

Líbrese el oficio correspondiente para tal fin.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO
Jueza

NOTIFICACION POR ESTADO

**JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DE QUIBDO**

En la fecha se notifica por Estado electrónico No. 45, el presente auto.

Hoy 19 de 10 de 2020, a las 7:30 a.m

Secretaria